

C.A. de Santiago

Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

Al folio N° 19: a lo principal, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Al folio N° 20: a todo, téngase presente.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que comparece don Claudio Marcelo Arellano Poblete, abogado, en representación de don **Dimas de Jesús Peraza**, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de amparo en favor de éste y en contra del **Servicio Nacional de Migraciones**, dependiente del **Ministerio del Interior y Seguridad Pública**, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°22077251 de 2 de febrero de 2022, por la cual se decretó rechazar la solicitud de regularización migratoria presentada en proceso extraordinario por el amparado, constituyendo tal acto administrativo una afectación ilegal y arbitraria a su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, consagrado en el artículo 19 N°7 de nuestra Constitución Política de la República.

Fundando la acción expone que el amparado tiene 67 años, ingresó al país el 19 de junio de 2019 a través del paso fronterizo Chacalluta, bajo la calidad migratoria de turista, dirigiéndose a la Región del Maule para vivir con sus hijos David y Dimas, ambos de apellidos Peraza Núñez y reencontrarse con su cónyuge doña Jacqueline Núñez Villalobos, por lo que pudo reunirse nuevamente con su familia que había dejado de ver en el año 2018 a causa de la crisis social, económica, política y humanitaria por la que atraviesa Venezuela y que es de público conocimiento.

Expresa que el 7 de agosto de 2019 concurrió al Departamento de Extranjería para solicitar un permiso de trabajo, el cual le fue otorgado, comenzando a realizar las gestiones necesarias para poder optar a una visa sujeta a contrato de trabajo, la cual finalmente le fue concedida el



23 de octubre de 2019 mediante Resolución Exenta N° 7.229, de 22 de octubre de 2019 con vigencia al 23 de octubre de 2020.

Sostiene que durante la vigencia de la mencionada visa, el amparado suscribió contratos de trabajos con la Constructora PROHAB y con la Sociedad Comercial Díaz y Arenas, los cuales le permitieron tener un sueldo y acceder a la seguridad social, pudiendo afiliarse a Fonasa y a AFP UNO, circunstancia que le permitió sustentarse en Chile por sí mismo sin representar una carga para el Estado.

Agrega que, una vez llegada la pandemia, se vio imposibilitado de conseguir la documentación necesaria para poder cambiar de visado, lo que trajo como consecuencia que su situación migratoria se tornará en una permanencia irregular.

Precisa que el 20 de abril de 2021 se publicó la Ley de Migraciones N°21.325, solicitando el amparado su regularización jurídica, la cual fue ingresada en mayo de 2021, mediante el número de solicitud 23681690, otorgándosele el 27 de mayo de 2021 un permiso para efectuar actividades lícitas remuneradas.

Añade que el 9 de febrero pasado la recurrida mediante Resolución Exenta N°22077251, revolió rechazar la solicitud de regularización mencionada, por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8° de la ley y la Resolución Exenta N°1769 de 2021, al no contar con pasaporte vigente, hoja de pasaporte donde conste la última prórroga vigente, encontrándose vencidos los acompañados, por lo que se dispuso el abandono del país dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de notificación.

Afirma que con la orden de abandono, el amparado ha visto amenazada la integridad familiar, debido a que dicha orden supone separar a su familia y en especial a su matrimonio, lo que transgrede la protección de la familia, la integridad psíquica y su libertad personal.

Concluye que es ilegal la medida al controvertir principios y disposiciones legales que regulan la materia, citando las normas Migratorias e indicando como vulnerados las garantías contenidas en los numerales 1, 2, 3 y 17 del artículo 19 de la Constitución Política de la



República y lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, siendo la medida adoptada desproporcionada, al contar el amparado con arraigo familiar y social, un comportamiento irreprochable y actividades laborales.

Previas citas legales y jurisprudenciales solicita que se disponga que se tomen todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, particularmente, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 22077251, de 9 de febrero de 2022 que contiene la orden de abandono como, asimismo, se ordene al recurrido conceder un plazo nuevo y prudencial dentro del cual mi representado pueda remitir la documentación faltante.

**Segundo:** Que comparece don Gabriel Ignacio Silva-Riesco Silva abogado del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso por no existir acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace la libertad personal y seguridad individual de la amparada.

Señala que el amparado ingresó al país el 16 de junio de 2019, por el paso habilitado carretera Chacalluta, el cual solicitó visa temporaria con permiso de trabajo, emitiéndose la Resolución Exenta N° 5240 de 7 de agosto de 2019, por la cual se otorgó al recurrente autorización para trabajar mientras su solicitud de visa esté en trámite.

Indica que, mediante Resolución Exenta N°7229, de 22 de octubre de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración, se otorgó al recurrente visación de residencia sujeta a contrato, válida por un año, en la condición de titular.

Refiere que, mediante Resolución Exenta N°1642, de 23 de abril de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, se otorgó al recurrente visación de residencia sujeta a contrato, válida por un año, en la condición de titular y que el 11 de mayo de 2021, el amparado solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley N° 21.325, desistiéndose voluntariamente de todo trámite pendiente en materia migratoria.



Precisa que mediante Resolución Exenta N° 21021573, de 11 de mayo de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por el recurrente, por lo que en virtud de la misma se tuvo por desistido de todo trámite pendiente en materia migratoria.

Añade que mediante Resolución Exenta N°22077251, de 09 de febrero de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el recurrente y se decretó orden de abandono del país, en un plazo de 30 días a contar de la notificación de la resolución, debido a que el amparado no presentó la hoja de identificación de su pasaporte vigente, como tampoco presentó, en subsidio, la hoja de su pasaporte donde consta su última prórroga vigente.

Finalmente, señala que el recurrente puede interponer los recursos administrativos del artículo 59 de la Ley 19.880, los que de conformidad al artículo 140 de la Ley 21.325, tienen efecto suspensivo respecto de la orden de abandono. De este modo, en su recurso administrativo, debe remitir la documentación faltante, siendo ésta la vía administrativa la competente para reponer o solicitar la reconsideración de un acto legalmente tramitado.

Alega los requisitos para postular a la regularización extraordinaria se encuentran se encuentran establecidos en la Resolución Exenta N° 1769, publicada con fecha de 20 de abril de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que fueron debidamente comunicados a los postulantes a través de la página web del servicio y, el recurrente no cumplió con acompañar un antecedente fundante para postular al proceso de regularización, al presentar documentos vencidos a la fecha de su postulación.

Citando las normas contenidas en el Decreto Ley N°1.094 y Decreto Supremo N°597, vigentes a la fecha de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° Transitorio de la Ley N°21.328, indica que estableciéndose la legalidad y mérito para haber rechazado la solicitud



de regularización migratoria del año 2021, las consecuencias del rechazo de un permiso de residencia en el sistema migratorio creado por la Ley de Extranjería y su Reglamento se encuentran expresamente establecidos siendo en el caso procedente disponer el abandono del territorio nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Extranjería, disposición de carácter imperativo para los órganos de la administración.

Indica que, el recurrente tiene derecho a interponer recurso administrativo en contra de la resolución exenta que rechazó su solicitud de regularización extraordinaria, en virtud del artículo 59 de la ley N° 19.880 y que, conforme lo establecido en el artículo 140 de la ley N° 21.325, la interposición de un recurso administrativo suspende los efectos de la resolución impugnada mientras la autoridad administrativa no resuelva el recurso. En este caso particular, en caso de que el recurrente interpusiera un recurso administrativo, tanto el rechazo de la solicitud de regularización extraordinaria como la orden de abandono, se encontrarían suspendidos sus efectos. Por lo tanto, como consecuencia directa de esto, la solicitud de regularización aún se encontraría en trámite.

Concluye que de las distintas actuaciones realizadas por la recurrida, resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones señaladas fueron llevadas a cabo por esta autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son la Ley N°21.325, la Resolución Exenta N°1769, de fecha 20 de abril de 2021, el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597.

**Tercero:** Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí , o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que



señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”. De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

**Cuarto:** Que el acto que el recurrente califica de ilegal consiste en la dictación de la Resolución Exenta N° 22077251 de 2 de febrero de 2022, debido a que no presentó no presentó la hoja de identificación de su pasaporte vigente, como tampoco presentó, en subsidio, la hoja de su pasaporte donde consta su última prórroga vigente, no cumpliendo lo establecido por la ley, disponiendo su abandono en un plazo de 30 días, no interponiéndose ningún recurso administrativo en contra de la resolución recurrida.

**Quinto:** Que el artículo 29 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior dispone que “Se otorgará visación de residente temporario al extranjero que tenga el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite vínculos de familia o intereses en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, visación que se hará extensiva a los miembros de su familia que vivan con él”.

Asimismo, en su artículo 6° se dispone que “El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de las visaciones a los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior, a excepción de aquellas correspondientes a las calidades de residente oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Por otra parte, el artículo 15 del Decreto Supremo N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior prescribe que “Para otorgar visaciones a los extranjeros que deseen ingresar al país en la calidad de residentes,



los funcionarios del Servicio Exterior, previamente, deberán verificar que no existan a su respecto causales de prohibición o impedimento de ingreso, y exigirles, a lo menos, que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Acompañar a su solicitud los documentos que acrediten su profesión u oficio, estado civil, actividades a realizar en Chile, solvencia económica, estudios, contratos, según corresponda a la visación solicitada y demás certificados que se estime necesario;

b) Acreditar buenos antecedentes mediante informes emanados de autoridades competentes;

c) Certificado de salud para los fines prescritos en el artículo 26°;

d) Comprometerse por escrito, mediante una declaración jurada, a no participar durante su permanencia en Chile en la política interna ni en actos que puedan inferir molestias a los Gobiernos con los cuales se mantienen relaciones amistosas y a respetar y cumplir la Constitución Política, las leyes y demás disposiciones que rijan en el territorio de la República”.

En cuanto a la tramitación de esta visa el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad”.

En lo relativo a los documentos que deben adjuntarse a la solicitud de visa el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597 señala: “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; 4. Pasaportes; 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico;



certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc (...).

La misma norma agrega, en su inciso final: “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

Finalmente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Extranjería, en su inciso segundo, se dispone que: “Revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere este decreto ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas, para que abandonen voluntariamente el país.”

**Sexto:** Que, de conformidad al marco regulatorio antes señalado, correspondía al amparado acompañar el documento que le fuera requerido, esto es, la hoja de identificación de su pasaporte vigente, en subsidio, la hoja de su pasaporte donde consta su última prórroga vigente apostillado o legalizado, conforme lo disponen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, otorgándosele para estos efectos un plazo de treinta días.

**Séptimo:** Que, en consecuencia, la autoridad migratoria se encuentra obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero, a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia, por cuanto así lo dispone el citado artículo 67 de la Ley de Extranjería, la que al mismo tiempo es de carácter voluntaria para el



afectado, a diferencia de una orden de expulsión, atendido que esta última es una medida compulsiva que puede adoptar la autoridad administrativa o judicial -en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley N° 18.216, modificada por la Ley N° 20.603- y que se cumple por la Policía de Investigaciones de Chile, pudiendo además el amparado regularizar de otra forma su situación migratoria.

**Octavo:** Que, por otro lado, del tenor de la signada resolución exenta, le reserva al extranjero los recursos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N° 19.880 sobre las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, los que se desconoce si efectivamente fueron interpuestos, de lo que colige que, el acto administrativo ahora impugnado por la vía judicial corresponde a un acto firme por la vía administrativa.

**Noveno:** Que, entonces, al haber constatado la administración que el recurrente no acompañó todos los antecedentes requeridos oportunamente en la tramitación de su solicitud, tiene la facultad que contempla el N° 2 del artículo 64 del D.L. N° 1.094 y, por lo mismo, ninguna ilegalidad puede reprochársele, habiéndose adoptado la decisión por la omisión en que incurrió el propio interesado en su oportunidad y no por la ilegalidad denunciada de parte de la autoridad.

**Décimo:** Que, de esta forma, se colige del tenor de la resolución recurrida y sus fundamentos, que aquella pone en conocimiento del amparado los fundamentos del rechazo impugnado y los antecedentes tenidos a la vista para adoptar la decisión.

Aparece además de los preceptos citados, que una vez decidido el rechazo del referido permiso, la autoridad debe de manera necesaria ordenar la medida de abandono del país del extranjero, atendido que no es posible que permanezca en el territorio nacional sin un permiso de residencia que así lo autorice, dejándose constancia que en la especie no ha sido decretada en contra de los amparados, las órdenes de expulsión del territorio nacional por parte de la recurrida.



**Undécimo:** Que, en estas condiciones, se evidencia que la resolución impugnada por la presente acción constitucional fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, por tener motivo plausible para ello, no advirtiéndose, por tanto, acto ilegal alguno de parte de la autoridad recurrida que prive, perturbe o amenace su derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado.

En razón a lo antes expuesto, se verifica que en el presente caso no existe ningún acto ilegal que sea necesario enmendar por medio de este recurso de amparo atribuible a la autoridad recurrida.

En consecuencia, no se advierte la existencia de un acto ilegal, por cuanto el actuar de la autoridad recurrida se ajustó al marco regulatorio legal para las solicitudes y tramitación de visas de residencia definitiva, toda vez que el acto recurrido emanó de parte de la autoridad determinada para ello, en los casos previstos por la ley.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la Republica y en el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de amparo, **se rechaza** el recurso de amparo deducido en favor de don Dimas de Jesús Peraza en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

**Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.**

N°Amparo-1391-2022.





WFLJZXPNSK

Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Antonio Ulloa M., Ministra Suplente Ana Maria Osorio A. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

